SCALERA, Italo. *La incongruencia y la ilegitimidad del artículo 219 de la Ley de Quiebra*. "Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali", año XLV, núms. 1 y 2, abril, 1970, pp. 17-28. Milán, Italia.

Scalera nos señala que, en los casos en que un sujeto, ya moral o ya físico, trata de cometer un fraude a sus acreedores, la Ley de Quiebras italiana establece una sanción muy drástica y llega al extremo de ser anticonstitucional, por el contenido que encierra su castigo, concretamente en su artículo 219, el cual establece que al que cometa fraude con sus acreedores y estando declarado en quiebra se le aplicarán un mínimo de 4 años y medio de reclusión y un máximo de 15 años. Se considera que es anticonstitucional, ya que la Ley fundamental de Italia señala, para casos como el fraude, una sanción menos grave; además, señala el autor que comentamos que la Ley de Quiebras no debió de repetir sanciones en su texto, ya que las leyes especializadas de la materia lo señalan ampliamente y en coordinación con la Constitución. La anterior repetición da lugar, en la práctica, a que el ministerio público entre en dudas sobre cuándo la declaración de quiebra es en fraude de acreedores, ya que en el momento de formular su presunta responsabilidad y fijar el cuerpo del delito, no sabe a cuál disposición debe seguir ante la ya citada duplicidad de disposiciones y ante la contrariedad y variedad de sanciones, pues la misma ley señala otros agravantes para esa misma conducta, agravantes que también son anticonstitucionales dado el elevado porcentaje de castigo que impone. Es de pensarse que el ministerio público y el juzgador deben de seguir un criterio adecuado a los principios de derecho y a las normas morales y sociales, pero el legislador pudo haber ahorrado conceptos para no exagerar en la protección de los intereses del quebrado y de la colectividad, los cuales ya estaban resguardados por leyes penales y por la misma Constitución.—Luis PÉREZ GÓMEZ.

DERECHO PENAL

ÁLVAREZ TAPIA, Heriberto. *Los elementos subjetivos y normativos del tipo*. "Revista Jurídica Veracruzana", núm. 1, tomo XXII, enero-febrero-marzo 1971, pp. 5-42. Xalapa, Veracruz, México.

Esta investigación abarca el estudio sistemático del tipo para concluir con los elementos del mismo.

Como primer punto se analizan, de manera por demás somera, las definiciones que del delito han dado los más connotados juristas contemporáneos, tanto europeos como latinoamericanos. Como punto siguiente se ve, brevemente, el antecedente inmediato de la noción del tipo, desarrollado por Ernst Von Beling y que, a partir del insigne tratadista alemán, se ha derivado toda una estructura jurídica tendiente a establecer el concepto o noción del tipo, en la que cada autor lo define de acuerdo con su personal punto de vista. Lo anterior finaliza con una serie de conceptos del tipo dados por famosos tratadistas.

Como consecuencia de lo anterior, surge lo que se llama la función del tipo. Aquí el autor únicamente anota el antecedente, refiriéndose, por tanto, a la consagrada fórmula latina *nullum crimen, nulla poena sine lege*, dada por Feuerbach en el año de 1801, fórmula que nuestro Código Político consagra en su artículo 14.

Con respecto a los elementos del tipo —como paso siguiente dado por el autor— se menciona, en primer término, la nueva teoría lógica-matemática propuesta por los profesores mexicanos Olga Islas y Elpidio Ramírez, en la cual se afirma que esos elementos del tipo son “los necesarios y suficientes para garantizar el bien jurídico”.

Al continuar con el desarrollo de la exposición nos encontramos con que el autor nos ofrece la división que de los elementos del tipo hacen los juristas mexicanos, cada uno por su parte.

Francisco Pavón Vasconcelos, por ejemplo, dice que los elementos del tipo son, en primer lugar, el elemento objetivo, entendiéndolo como “aquel elemento susceptible de ser apreciado por el simple conocimiento y cuya función es describir la conducta o el hecho que pueden ser materia de la imputación y de responsabilidad penal”. El elemento normativo, como segundo elemento del tipo, “forma parte de la descripción contenida en los tipos penales; se le denomina normativo por implicar una valoración de él por el aplicador de la ley”. Por último, expresa que los tipos, con frecuencia, contienen elementos subjetivos, por cuanto se refieren al motivo y al fin de la conducta descrita.

El profesor Carrancá y Trujillo, aun cuando no formula concepción alguna de los elementos del tipo, reconoce su existencia.

Por su parte, Von Beling afirma que los elementos subjetivos son sólo frases que se refieren a la descripción. De los normativos, dice que no son elementos sino “referencias jurídicas” de la conducta.

Sauer llama a los elementos subjetivos “características subjetivas”, que son al mismo tiempo características tipificadas de la culpabilidad. A los elementos normativos los denomina “caracteres especiales normativos” y dice que son muy frecuentes, “ya que pueden añadirse a todo carácter descriptivo y ser inferidos de todas las materias de Derecho y de los diversos ámbitos de la cultura”.

En conclusión, los elementos subjetivos son referencias especiales conectadas con el dolo, dirigidas a la realización de la parte objetiva del tipo y vinculadas con el propósito y el fin del agente.

Los elementos normativos son aquellas características implícitas en el tipo que determinan una especial valoración, jurídica o cultural por parte del juzgador.

Por último, los elementos objetivos son los que describen la conducta o el hecho y que son susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento.
—ENRIQUE VALLADO.

BERISTÁIN, Antonio. *La reforma del Código Penal alemán*. “Criminalia”, año xxxv, núm. 11, noviembre de 1969, pp. 631-649. México, D. F.

La revista “Criminalia” publica, con la debida autorización del “Anuario de Derecho Penal” de Madrid, un concienzudo trabajo del profesor Beristáin, quien presenta un análisis panorámico de las reformas al Código Penal ale-

mán. Considerando, en primer término, el periodo de preparación de dichas reformas, periodo que se inició en 1953 y en el que participaron los principales penalistas alemanes y, de modo especial, el actual "Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht" de Freiburg.

La reforma a la legislación penal de la República Federal Alemana ha sido programada para realizarse en tres fascs. La primera, contenida en una ley que entró en vigor en abril de 1970, está encaminada a modificar ciertos aspectos de la parte general del Código Penal. La segunda, que tiene por objeto la reforma total de la parte general del Código, se encuentra contenida en una ley que entrará en vigor el primero de octubre de 1973. En tanto que a la tercera fase corresponde a la reforma total de la parte especial.

Estas reformas, en opinión de Beristáin, colocan al derecho penal alemán como líder de un movimiento de reforma total del derecho penal. Las reformas comprenden, en primer término, una reorientación de la política criminal, y, en segundo lugar, una nueva estructuración más acorde con las modernas doctrinas jurídico penales.

Como eje de la política criminal que anima a las reformas se encuentra la tendencia resocializadora y humanitaria, según la cual se concibe al delito como una perturbación sociológica y psicológica más que como el quebrantamiento culpable del orden jurídico, sin que por ello desaparezca el principio de culpabilidad y la dualidad de penas y medidas de seguridad. La pena se considera, dentro de las reformas, como un medio de reeducación y reinserción social, aunque sin perder ciertos aspectos de su naturaleza compensadora. De aquí que se hayan reducido al mínimo las penas privativas de libertad, procurando sustituirlas por sanciones de tipo económico o por tratamientos en regímenes de libertad.

Después de señalar las directrices generales de la reforma, Beristáin hace una relación de las principales innovaciones estructurales concretas, tanto de las reformas a la parte especial como de las correspondientes a la parte general. Estas medidas tienden a armonizar el derecho penal con las nuevas concepciones socio-culturales de la R.F.A., tendencia que se manifiesta de manera especial en la reestructuración de la parte relativa a los delitos contra la seguridad interior del Estado y en lo relativo a los delitos contra la honestidad y la familia.

Beristáin finaliza su estudio comparando el movimiento reformador alemán con los proyectos de reformas al Código Penal austriaco elaborados en 1968 y en los cuales se sigue concibiendo al Derecho Penal como promotor del orden público y privado, así como de las buenas costumbres. Acertadamente señala Beristáin la necesidad de que las reformas sustantivas se acompañen de nuevas formas procesales, puesto que de lo contrario las reformas correrán el peligro de convertirse en letra muerta.—Santiago OÑATE LABORDE.

CAMAÑO ROSA, Antonio. *Los trasplantes de órganos humanos frente al derecho penal*. "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", tomo 68, núm. 1, septiembre de 1969, pp. 21-24, Montevideo, Uruguay.

Teniendo como punto de partida un dictamen de la Fiscalía Letrada del Crimen de Montevideo, el penalista uruguayo Camaño Rosa aborda el pro-

blema de los trasplantes de órganos, tema que él mismo califica de "virgen y apasionante", examinando las deficiencias de la legislación penal uruguaya en torno al problema, problema que ya ha sido resuelto, como él mismo señala, por el nuevo Código Sanitario del Perú.

El dictamen en cuestión sostiene que la sustracción o mutilación de parte de un cadáver por móviles terapéuticos no se halla prevista como delito, por no estar dichos móviles entre los enumerados taxativamente por los artículos 307, 309 y 340 del Código Penal uruguayo.

El sistema del Código Penal uruguayo de 1933 tiene como fuente principal, en materia de cadáveres, al Proyecto Rocco de Código Penal italiano. Camaño hace una comparación descriptiva en torno al tema entre el Proyecto italiano de Rocco y los códigos penales italiano de 1930 y uruguayo de 1933, para concluir señalando las lagunas de la legislación penal uruguaya, lagunas provenientes en su mayoría del Proyecto de Rocco y que fueron colmadas técnicamente por la legislación italiana, así como el anacronismo de ambas legislaciones en relación al problema de los trasplantes de órganos.

En el problema de los trasplantes deben contemplarse dos hipótesis distintas, a saber, el trasplante de órganos de un cadáver, y el trasplante de órganos de seres vivos. En el primer caso, el interés jurídico en cuestión es el respeto hacia los difuntos, en tanto que en el segundo es la vida humana el bien que se pone en juego; de donde se sigue que no es válida una solución en bloque al problema.

Concluye proponiendo una reforma a las leyes penales uruguayas, tomando como modelo al Código Sanitario del Perú, que se ocupa de los trasplantes de órganos de cadáveres. Este ordenamiento considera que todo órgano aprovechable de un muerto puede utilizarse para la conservación de la vida humana, siempre y cuando se tome en cuenta la voluntad del propio sujeto antes de morir o la de sus familiares; esta restricción no existe tratándose de cadáveres abandonados o no identificados. Para los efectos de injertos o trasplantes, la ley peruana entiende por muerte el paro irreversible de la función cerebral.—SANTIAGO OÑATE LABORDE.

GRAMTON, Roger C. *Driver Behavior and Legal Sanctions: A Study of Deterrence*. "Michigan Law Review", vol. 67, núm. 3, enero, 1969, pp. 421-454. Ann Arbor (Michigan), E.U.A.

A través de los tiempos el sistema legal de las sanciones ha sido establecido en parte porque había diferentes criterios sobre la conducta humana. Con el crecimiento en la actividad gubernamental, resultante de la complejidad e independencia de la moderna sociedad, el énfasis sobre los fines de la conducta se ha acentuado. El derecho ya no se considera como misterioso, sagrado y relativamente inmutable, sino como un instrumento racional que puede asistir a los propósitos sociales. El crecimiento de esta concepción, sin embargo, puede implicar riesgos sobre la indebida intrusión en las preferencias de los individuos. Una detenida observación de las legislaciones existente y propuesta puede determinar las metas que intentan conseguir, lo que es obviamente necesario hoy en día. Una sociedad racional puede diseñar sus estruc-

turas legales para que, en lo posible, la conducta indeseable y antisocial resulte minimizada y socialmente inútil. Si la sociedad valúa la independencia y dignidad de sus miembros, minimizará el uso de la coacción oficial tanto como la tolerancia de una considerable zona de libertad entre lo prohibido y lo mandado. La prevención de la muerte innecesaria, de las lesiones y los daños es un deseo universal de los hombres. Más específicamente, su reducción, la reducción de los peligros del amplio uso de los vehículos, es manifiestamente un objetivo apropiado de la actividad regulatoria. Sólo hay controversias respecto a las técnicas que deben emplearse y el plano de esfuerzo social apropiado. Obviamente, algunas formas de control operarán mejor que otras. La sociedad necesita determinar el punto en que una mayor reducción de accidentes es un precio que no puede o debe pagarse. De ahí que Cramton comience por estudiar el sistema legal de las sanciones como una técnica de prevención y ofrezca algunas definiciones al respecto, disuaciones generales (cuya efectividad por medios coactivos ha sido confirmada, pero que sólo puede propugnarse si alcanzan resultados dramáticos); prevención de la conducta indeseable de los conductores, regulaciones de estacionamiento, violaciones de tránsito, el bajo riesgo en las aprehensiones, relación entre violaciones y accidentes, conducción por personas intoxicadas, aumento en las aprehensiones, penalidades demasiado severas, personas viciosas, el problema de los alcohólicos, rehabilitación de los conductores; métodos de investigación, comparaciones entre tiempo y espacio, y control de experimentos. El autor concluye sosteniendo que los experimentos hechos en las vías de alta velocidad pueden servir también para los demás casos. Hay una amplia evidencia de la conducta humana influida por la aplicación de sanciones, la que es complementaria, porque las normas legales tienen una trascendencia moral y educativa, ya que el transgresor teme las consecuencias, y la conciencia de estos deberes, sobre todo en la temprana edad, da excelentes resultados de respecto a tales disposiciones. Todo ello depende de factores tales como las motivaciones para admitir las prohibiciones, la personalidad del infractor potencial y el medio en que el sujeto crece y se educa.—Humberto BRISEÑO SIERRA.

IZCUA BARBAT. *En torno a la segunda instancia y el artículo 125 ...* V. DERECHO PROCESAL.

LECH-JONES. *Products Liability: Consumer protection in America.* V. DERECHO ADMINISTRATIVO.

MENDOZA VIDAL, Roger L. *Abandono y descuido de menores.* "Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico", vol. 30, noviembre de 1969, núm. 1, pp. 171-178. San Juan, Puerto Rico.

El abandono de menores es para Puerto Rico, así como para la mayoría de los pueblos del Tercer Mundo, un problema del subdesarrollo, que las legislaciones penales procuran atenuar.

Mendoza Vidal analiza las innovaciones introducidas por la ley núm. 9 de 16 de mayo de 1966, que enmienda el procedimiento y modifica el alcance del artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico, relativo al abandono y descuido de menores.

Tras señalar las deficiencias contenidas en la ley núm. 108 de 1940, que era en exceso formalista, analiza las características esenciales de la nueva ley, que redefine el delito de abandono de menores en atención a la obligación que tienen todo padre o madre de alimentar a sus hijos.

El procedimiento instaurado por el nuevo ordenamiento crea una jurisdicción concurrente entre el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito, dotándose de un mayor poder coactivo al segundo.

El autor señala, como principal defecto del nuevo ordenamiento, la no aplicabilidad del nuevo procedimiento, que es de breve substanciación, a los casos de abandono de hijos adulterinos, quienes tienen que acogerse al lento, costoso y complejo procedimiento de impugnación de paternidad, alimentos y filiación establecido con anterioridad.—Santiago OÑATE LABORDE.

VÁZQUEZ ALFARO, Guillermo. *Apuntes para un estudio sobre la criminalidad en el medio rural mexicano*. "Criminalia", año xxxv, núm. 9, septiembre de 1969, pp. 558-568. México, D. F.

Para Vázquez Alfaro el problema del agro mexicano comprende tres aspectos: el jurídico, el económico y el social. La criminalidad es una de las ramas en que se divide el aspecto social de la problemática agraria.

En primer término y con el fin de alcanzar objetividad crítica, Vázquez Alfaro determina el contenido socioeconómico de lo rural.

Las conductas ilícitas relacionadas con el medio rural son clasificadas por el autor de acuerdo con la naturaleza del sujeto activo. De esta manera se distinguen los delitos perpetrados por funcionarios y empleados, por autoridades ejidales y comunales de los núcleos de población y los cometidos por particulares, ya sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.

Una segunda clasificación de los delitos vinculados al agro se establece empleando como criterio la conducta tipificada. De esta manera, y en orden a la frecuencia con que son cometidos, se habla de delitos de responsabilidad oficial, de delitos de despojo, de delitos de responsabilidad de autoridades ejidales y comunales, de fraudes y de delitos de abuso de confianza y, finalmente, de delitos relativos a la falsificación de documentos y al empleo de los mismos.

Como causa socioeconómica fundamental de la criminalidad en el medio rural mexicano, Vázquez Alfaro señala la irregularidad en la conducta de los funcionarios agrarios, conducta que no es reprimida con la energía necesaria por las autoridades judiciales. Otra de las causas del alto índice de criminalidad debe buscarse en las deficiencias de la estructura jurídica agraria, principalmente en lo relativo al orden procesal.

Tras examinar algunas cuestiones procedimentales, el autor opina que los artículos 353 y 354 del Código Agrario, en términos generales satisfactoria-

mente redactados, deben de adicionarse a fin de comprender, como sujetos activos de los delitos en ellos tipificados, a los miembros de los consejos de vigilancia de los ejidos y a los de los comisariados de bienes ejidales o comunales. Igualmente, considera que el artículo 353 del citado ordenamiento debe comprender el delito de abuso de confianza relativo a bienes ejidales o comunales, así como las enajenaciones fraudulentas de parcelas y solares ejidales.—Santiago OÑATE LABORDE.

VIDAL, HUMBERTO S. *Los trasplantes de corazón y el momento de la muerte frente al Derecho Penal*. "Cuadernos de los Institutos", núm. 107, 1970, pp. 129-138. Córdoba, Argentina.

En este artículo, el autor nos explica cómo en época remota la ciencia médica realizó sus primeros trasplantes. Los métodos utilizados en esa época resultan repugnantes en la actualidad y un tanto de carnicería humana. Sin embargo, el gran desarrollo de la ciencia médica, producido desde la última guerra, ha hecho posible el trasplante de órganos entre vivos.

A guisa de ejemplo, se mencionan los posibles problemas que podrían surgir de un trasplante de cerebro. Se habla de un primer problema: la inexperiencia de una hazaña quirúrgica de tal magnitud sin que se descarte la posibilidad de que se pueda realizar. Un segundo problema consiste en que no se trasladaría un cerebro a otro cuerpo, sino al revés, un cuerpo a otro cerebro, y, el resultado sería una persona que no era la trasplantada o receptora.

El autor únicamente nos plantea la cuestión sin abundar más en ella, prefiriendo referirse, exclusivamente, a la problemática de los trasplantes de corazón que han producido en los últimos años una enorme cantidad de incógnitas, tanto por parte de los juristas y profesionales de la materia como de la inmensa mayoría de las personas en el mundo.

El problema principia en la posibilidad de encontrar a un dador que haya muerto hace poco tiempo, que aún no comience la descomposición de los tejidos de sus órganos, y de un receptor a punto de morir.

Con lo expuesto, el autor nos ofrece un interrogante: ¿En qué momento el hombre ha muerto para que pueda extraérsele el corazón?

El autor nos contesta, al poder afirmar, que ya en la actualidad el nivel científico está en la posibilidad de poder determinar el momento de la muerte, siempre y cuando no se descarte la posibilidad de que la determinación de ese momento pueda complicarse, como consecuencia de la aparición de la criobiología: ciencia que se encarga del comportamiento de la materia orgánica a muy bajas temperaturas.

Al ser la medicina la ciencia natural por excelencia para la determinación del momento de la muerte, sus conclusiones informan al derecho cuándo un ser cesó de existir y se le considera muerto. Por ser la vida el bien jurídico fundamental del hombre, se le protege en sus más mínimas manifestaciones por parte del derecho penal, que es el encargado más directo de la determinación del momento de la muerte.

El diagnóstico de muerte de una persona no lo es total, sino que ésta se realiza por etapas, conociendo el crecimiento *post-mortem* del cabello, barba y uñas; sabiendo esto, el problema principal se traduce en cómo y cuándo determinar el momento de la muerte, y no en sí existe o no el estado total de la misma. Para lo cual el médico, en cada caso, establecerá cuándo, cómo y por qué la persona ha fallecido y es susceptible de que se le extraiga cualquier órgano. Es la parte médica quien deberá determinar ese momento y a ella deberá acudir el juez si es del caso.

Por medio de una determinación científica, el momento de la muerte constituye un estado definitivo e irreversible.

El autor se opone a que el derecho elabore una definición del momento de la muerte, ya que definiciones de este tipo —dice— tienen el vicio de asfixiar parte de la múltiple realidad que intentan abarcar.

Así, la muerte es y será lo que siempre fue: un hecho real que pertenece al mundo del ser y no enmarcado en una definición jurídica y remitido al mundo del deber ser.

Lo expuesto nos conduce a no considerar delictuosa la acción de extraer un corazón de persona inmediatamente muerta y trasplantarlo en otra viva. La circunstancia de que torne a funcionar en el cuerpo del receptor no implica que el cuerpo del dador estaba vivo.

A manera de conclusión, se sostiene que real y jurídicamente puede determinarse un momento en que el hombre deja de existir y muere. Desde ese instante es posible e impune el trasplante cardiaco.—Enrique VALLADO.

ZAFFARONI, Raúl E. *Temas Penales. Las personas morales no son sujetos activos del delito*. "Revista Jurídica Veracruzana", núm. 1, tomo XXII, enero-febrero-marzo, 1971, pp. 51-54. Xalapa, Veracruz, México.

Al descartarse las sanciones a los animales y los procesos a los muertos a fines del siglo XVIII, por considerarse absurdos, el derecho continental aceptó que únicamente las personas físicas son sujetos de delitos, ya que sólo ellas tienen una voluntad subjetiva.

Recordemos que el primer escritor que mereció en Francia el nombre de historiador, G. A. de Thou (1553-1617), adquirió nombradía como juriscónsulto gracias a un proceso en el que defendía a los topos campestres de su país y de los que había sido nombrado abogado por el obispo del lugar.¹

Sin embargo, por un criterio formal, y un embate positivista, surgió el criterio de que las personas morales² —como los animales y los muertos hasta antes del siglo XVIII— eran sujetos activos de delitos.

El autor se muestra contrario a lo anterior, ofreciendo sus argumentos para consolidar su postura.

¹ Manzini, Vincenzo, *Derecho Procesal Penal*, Ejea, Buenos Aires, 1952, t. II, p. 395.

² Cabe recalcar que en esa época los animales y los muertos eran considerados personas morales.

El delito, al requerir de una conducta o acto, va sea positivo o negativo, y regirse por una voluntad final, sin que difiera del querer y conocer finalístico, o sea, el dolo, y por ser el dolo individual, no colectivo, las personas morales son incapaces de tener una voluntad típica de una conducta. Por tanto, las sanciones que se apliquen a las personas morales, por conductas de personas físicas, que constituyan delito, tendrán un carácter administrativo y no penal aun cuando las ordene un juez penal.—Enrique VALLADO.

DERECHO PROCESAL

BONSIGNORI. *La suspensión de la venta concursal* . . . v. DERECHO MERCANTIL.

FIX-ZAMUDIO. *Algunos aspectos de la protección de los derechos humanos* . . . v. DERECHO CONSTITUCIONAL.

FIX-ZAMUDIO, Héctor. *Introducción al estudio del proceso tributario en el Derecho mexicano*. "Instituto de Estudios de Administración Local", 1969, pp. 1055-1139. Madrid, España.

El autor Héctor Fix-Zamudio, quien es Director e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos da una idea completa del proceso tributario en el derecho mexicano. El artículo en cuestión se encuentra estructurado en una introducción (pp. 1056-1074) y en dos grandes partes, la primera, sobre el proceso tributario (pp. 1074-1110) y la segunda parte, el amparo en materia tributaria (pp. 1110-1136).

En la parte introductiva se hace una referencia al derecho procesal administrativo, donde se ven las diferentes corrientes jurídicas que han influenciado nuestro sistema procesal administrativo, tales como: el sistema angloamericano, el sistema hispánico colonial, el sistema mixto de judicialismo y tribunales contencioso-administrativos; así como la transformación del juicio de amparo. Se estudia también la situación del particular frente a la autoridad administrativa, quien se encuentra en una situación que el autor considera "angustiosa", si se toma en cuenta la complejidad del sistema y la ausencia de un criterio orientador (p. 1061); el doctor Fix-Zamudio hace suya la cita del tratadista español Jesús González Pérez de que el administrado es esa persona que aparece al lado de o frente a la administración pública, es el gran olvidado en los estudios modernos del derecho administrativo; habla, asimismo, de los recursos administrativos, donde trata del procedimiento y del proceso administrativo, la autocomposición en los recursos, la relación jurídico-procesal, los problemas del agotamiento previo de los recursos, de la necesidad de una ley de procedimiento administrativo, que podría obtenerse haciendo una depuración de los recursos administrativos que se han establecido en el Código Fiscal de la Federación que, para el autor, podría sustituir la verdadera maraña de disposiciones que actualmente existen.